

PAÍS VALENCIÀ

Por la dignidad de la enseñanza pública: dimisión del conseller Font de Mora

EL CONSELLER de Educación, Alejandro Font de Mora, y la secretaria autonómica de educación, Concha Gómez Ocaña, amparados por los acuerdos del Consell Valencià y por el president Francisco Camps, mantienen a la comunidad educativa en plena movilización desde el mes de junio.

La disparatada Orden de organización pedagógica de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) provocó durante el período de matriculación que padres, alumnos, profesorado y agentes sociales tomaran diversas iniciativas para ejercer su derecho a la educación y a un trabajo digno por encima de las pretensiones alegales o ilegales de la Administración: la solicitud de impartir y acceder a EpC en castellano o valencià y la negativa a ofertar o escoger la opción B (que reducía la asignatura a un trabajo trimestral escogido por la familia de los alumnos) guiaron la mayor parte de las expresiones de rebeldía ante lo que se ha considerado un abuso de autoridad por parte del Consell y por un atentado contra la dignidad de los profesionales y de toda la comunidad educativa.

El acto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en respuesta al recurso interpuesto por CCOO, por el que se suspendía cautelarmente la Orden de la Conselleria en cuanto a la opción B y a la evaluación de los conocimientos en inglés del alumnado, ha dejado fuera del marco legal todos los desarrollos normativos posteriores que han ideado o promovido los responsables (?) autonómicos. Estas instrucciones relativas a la organización de los centros educativos han sido redactadas hasta tres veces ante la sospecha, más que fundada, de que caían fuera de la legalidad; pero la testarudez y prepotencia del conseller y la secretaria autonómica han colmado la paciencia de una comunidad educativa que ha visto en la repercusión mediática de este disparate la oportunidad para hacer ver su descontento con la situación del sistema educativo valenciano.

Las protestas han recibido el respaldo de la mayoría de la comunidad educativa. Se suceden concentraciones, encierros y manifiestos para hacer visible el descontento y la exigencia de un cambio radical en la política educativa autonómica. La Administración ha respondido con alardes de autoritarismo y llamativas respuestas en los medios de comunicación.

A las manifestaciones de los días 27 de octubre y 4 de noviembre, se suman las convocadas para la semana del 17 al 21 de noviembre y el sábado 29 para exigir la dimisión de Alejandro Font de Mora y un cambio radical en la política educativa.